

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020).

AUTO INTERLOCUTORIO No. _____.

MAGISTRADO PONENTE: FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
EXPEDIENTE:	76001-23-33-010-2018-00742-00
DEMANDANTE:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
DEMANDADO:	DANNY GISELLA VIDAL MURILLO
ASUNTO	RECURSO DE REPOSICIÓN

El apoderado judicial de la parte demandante interpuso recurso de reposición contra el auto interlocutorio sin número de fecha 24 de enero de 2020¹, que negó la solicitud de medida cautelar.

I. ANTECEDENTES

En ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, la UGPP solicitó la nulidad de los siguientes actos administrativos:

- Resolución No. 134302 del 13 de octubre de 1975, por medio de la cual se reconoce una pensión de jubilación convencional.
- Resolución No. 20312 del 03 de octubre de 1975, por medio de la cual se confirma la resolución anterior.
- Resolución No. 138515 del 16 de febrero de 1977, por medio de la cual se reajusta el valor de la pensión de jubilación.
- Resolución No. 001380 del 20 de octubre de 2009, por medio de la cual se reactiva el pago de la mesada pensional.
- Resolución No. 053 del 29 de enero de 2010, por medio de la cual se reajusta el valor de la mesada pensional.
- Resolución RDP 00898 del 11 de enero de 2013, por medio de la cual se sustituyó la pensión de jubilación convencional a favor de la señora Danny Gisella Vidal Murillo

A título de restablecimiento, solicitó se declare que no le asiste derecho a la demandada a devengar dos pensiones, y como consecuencia de ello se ordene el reintegro de todo el dinero devengado.

Como medida cautelar, la UGPP pidió la suspensión provisional de los actos administrativos demandados. Afirmó que frente al señor José Antonio Vidal Graja está comprobado que devengaba dos prestaciones, una pensión de jubilación convencional por parte de la liquidada Empresas Puertos de Colombia hoy asumida por la UGPP, y una pensión de vejez reconocida por el Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones, pensiones que por su naturaleza son incompatibles, según lo dispone el artículo 128 de la

¹ Ver folios 16 a 21 C-2



Constitución Política de Colombia, pues el riesgo de vejez fue debidamente protegido, en virtud de los aportes efectuados para cubrir dicha contingencia por el ISS hoy Colpensiones.

Finalmente, indicó que si bien es cierto se evidencia que la pensión de vejez reconocida por el ISS hoy Colpensiones es incompatible con la pensión de jubilación convencional reconocida por la Empresa de Puertos de Colombia, también lo es que a la luz de la sentencia fechada 24 de febrero de 2016, M.P. Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz, Exp: 69295 SL2821-2016 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, éstas dos prestaciones eventualmente podrían ser compartibles si así lo considera el Juez de conocimiento, pues de la lectura de la norma no se puede concluir con certeza que las pensiones sean compatibles.

II. AUTO RECURRIDO

El Despacho profirió auto sin número de fecha 24 de enero de 2020, negando la medida cautelar, por considerar que en el presente asunto de las pruebas obrantes en plenario no resulta palpable la violación que aduce la parte demandante, ya que es necesario examinar y valorar diversos aspectos de carácter probatorio e interpretativo que no son propios de esta etapa procesal, por lo que no se advierte en este momento la violación normativa alegada por el demandante y, por ende, la apariencia de buen derecho que exige el decreto de una medida cautelar.

Añade que, el ordenamiento, jurídico, debe guiar el actuar de todas las autoridades administrativas, por lo que si bien es cierto el presente medio de control busca anular la resolución por medio de la cual se reconoció una pensión a la demandada, también lo es que la fundamentación y elaboración del acto correspondió únicamente a la UGPP, por lo que no se puede endilgar responsabilidad a la demandada cercenándole el derecho a percibir su mesada pensional.

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Inconforme con la decisión anterior, la parte demandante presentó recurso de reposición, al estimar que en el presente caso se encuentra probado que, conforme a la liquidación de los valores pagados en forma indebida al causante y su beneficiaria, se está causando un detrimento al erario público, en tanto que los dineros con los que se pagan dichas mesadas pensionales corresponden a dineros administrados por el FOPEP pero que gozan del carácter público.

En conclusión, afirmó que se encuentra probado con el expediente administrativo aportado por la entidad que la ahora demandada en calidad de beneficiaria del causante no puede seguir devengando dos mesadas pensionales por la incompatibilidad de las mismas. En el análisis de hecho y de derecho del cuerpo de la demanda se puso de presente las normas violadas y el concepto de su violación para efectos de determinar o acceder a la suspensión provisional de los actos administrativos materia de debate.

Así mismo, y en lo que respecta a la afectación del erario se tiene que las mesadas con las que se paga mes a mes la pensión en favor de la señora Danny Gisella Vidal Murillo, provienen de dineros pertenecientes a la Nación.

IV. CONSIDERACIONES

El CPACA estableció que las medidas cautelares no solo están orientadas a la prevención de un daño inminente o de hacer cesar el perjuicio que se hubiera causado, sino también a garantizar el objeto del proceso y lograr la efectividad de la sentencia; adicionalmente, clasificó las medidas de acuerdo con la etapa en la que se encuentre el proceso, es decir: preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y pueden ser decretadas en cualquier tiempo.

Sobre los presupuestos para decretar medidas cautelares en los procesos adelantados ante la jurisdicción contenciosa administrativa señaló:

“Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurren los siguientes requisitos:

- 1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.***
- 2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.***
- 3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.***
- 4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:***
 - a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o***
 - b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios [...].”*** (Subraya fuera del texto).

La anterior disposición, de acuerdo al análisis efectuado por el Consejo de Estado, se traduce en que los requisitos para decretar las medidas cautelares son de tres categorías: **(i)** requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole formal, **(ii)** requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole material, y **(iii)** requisitos de procedencia específicos².

CASO CONCRETO:

De conformidad con lo expuesto en líneas anteriores, la suspensión provisional del acto enjuiciado procede en dos casos: i) cuando la violación de las normas invocadas por el demandante surja del análisis del acto y su confrontación con las normas superiores; ii) cuando se desprenda del estudio de las pruebas aportadas con el escrito de demanda.

² Consejo De Estado, Sección Segunda, Subsección “B”. Consejera Ponente: Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Auto de 6 de abril de 2015. Expediente N°: 11001-03-TERRITORIO.

Ahora bien, la inconformidad del recurrente radica en que se encuentra plenamente probado que conforme a la liquidación de los valores pagados en forma indebida al causante y su beneficiaria, se esta causando un detrimento al erario público, en tanto que los dineros con los que se pagan dichas mesadas pensionales corresponden a dineros administrados por el FOPEP pero que gozan de carácter público.

Sobre el particular, debe decirse que tal como se expuso en el auto del 24 de enero de 2020, de conformidad con el estudio preliminar realizado, se observa que la discusión promovida por la UGPP versa sobre temas de compartibilidad y compatibilidad pensional, razón por la cual la de la mera comparación de los actos administrativos demandados con las normas acusados no resulta palpable la violación.

Además, respecto de las aseveraciones realizadas por el recurrente, no logra apreciarse en esta oportunidad argumentos de tal entidad que permitan reponer la decisión inicialmente adoptada, ya que estos deben ser analizados al momento del fallo.

Ahora, en relación con la prohibición de percibir dos remuneraciones del tesoro público, del análisis previo realizado se observa que nos encontramos frente a un caso de compartibilidad pensional, por lo que se requiere que el proceso avance en sus diferentes etapas y se enriquezca con el material probatorio a recaudar, escuchándose las alegaciones de las partes, a fin de entrar a determinar a través de un análisis minucioso y detallado, los supuestos vicios de los actos administrativos acusados, en razón a que, hasta este momento, el apoderado de la UGPP y solicitante de la medida cautelar no ha configurado con precisión necesaria la presunción de buen derecho.

Además, suspender los efectos de las resoluciones demandadas en este momento procesal implica desconocer los principios de confianza legítima y buena fe respecto de la demandada, pues goza de una pensión hace varios años, como derecho que en su momento reconoció la propia administración. Ello bajo el entendido que dicho principio exige a las autoridades y a los particulares ser coherentes en sus actuaciones, observar los compromisos a los que se han obligado y ofrecer una garantía de estabilidad y durabilidad que permita inferir objetivamente el cumplimiento de las reglas propias del ordenamiento jurídico, pues así como la Administración Pública no puede ejercer sus potestades defraudando la confianza debida a quienes con ella se relacionan, tampoco el administrado puede actuar en contra de aquellas exigencias éticas.

Por todas las consideraciones anteriormente expuestas, no hay lugar a reponer la providencia del 24 de enero de 2020. En virtud de lo anterior, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Unitaria de Decisión del Sistema Oral,

R E S U E L V E:

PRIMERO: NO REPONER el auto de fecha 24 de enero de 2020, acorde con lo explicado en la parte motiva de esta providencia.

RADICACIÓN
Medio de Control
Demandante
Demandado

: 2018-00742-00
: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-LABORAL
: UGPP
: DANNY GISELLA VIDAL MURILLO



NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ
Magistrado

Elab. Yurani López
Vo.bo. Secretario